

ÍNDICE AI: AFR 47/10/97/s

NO PUBLICAR ANTES DE LAS 00:01 HRS GMT DEL 19 DE FEBRERO DE 1997

RUANDA: LOS DELEGADOS DE AMNISTÍA INTERNACIONAL RECIÉN LLEGADOS DE RUANDA INFORMAN SOBRE UNA NUEVA OLEADA DE ABUSOS

Según ha informado hoy una delegación de Amnistía Internacional que acaba de regresar de Ruanda, en ese país se ha registrado un incremento significativo de incidentes de abuso contra los derechos humanos desde la repatriación masiva y forzosa de refugiados desde el Zaire y Tanzania en los meses de noviembre y diciembre de 1996.

La delegación ha informado sobre toda una serie de preocupantes sucesos, como crecientes ejecuciones ilegítimas por parte del Ejército Patriótico Ruandés (EPR) -especialmente en el contexto de operaciones de represalia-, homicidios deliberados y arbitrarios de civiles por parte de grupos armados que se cree compuestos por soldados del anterior ejército de Ruanda y de milicias *interahamwe*, homicidios de civiles hutu a manos de civiles tutsi, y «desapariciones».

Los delegados de la organización han manifestado: «En Ruanda se cometen homicidios casi a diario, especialmente en las regiones septentrional y occidental. Se calcula que desde el comienzo del año se ha dado muerte a varios centenares de personas, la mayoría de ellas civiles desarmados, entre las que además había niños».

La región noroccidental de Ruhengeri se ha visto especialmente afectada por el reciente rebrote de abusos contra los derechos humanos. Por ejemplo, el 25 de enero, un grupo de hombres armados que se cree que eran soldados del anterior ejército de Ruanda o de sus milicias, mataron en la localidad de Kinigi al menos a 20 civiles tutsi. Al día siguiente, no menos de 140 personas perdieron la vida en lo que se cree que fue un ataque de represalia por parte de civiles tutsi en presencia de soldados del EPR, que al parecer no hicieron nada por proteger a las víctimas.

Según los informes, tras la muerte el pasado 18 de enero en Ruhengeri de los tres españoles miembros de la organización *Médecins du Monde*, soldados del EPR han matado a decenas de civiles desarmados en el transcurso de diversas operaciones militares de rastreo en las áreas colindantes.

De acuerdo con la información disponible, el 4 de enero soldados del EPR mataron en Nkumba -también en Ruhengeri- al menos a 55 civiles desarmados tras rodear una vivienda en la que se sospechaba que había infiltrados.

A mediados de enero, civiles tutsi mataron a palos en dos incidentes distintos ocurridos en Rusumo, en la región oriental de Kibungo, al menos a 60 retornados de Tanzania. Según se ha informado, algunos de los cadáveres fueron hallados en zanjas y otros en letrinas. Parece ser que se ha detenido a varias personas en relación con estos homicidios. Según los informes, en otro incidente distinto ocurrido en la misma zona, y en torno a las mismas fechas, «desaparecieron» aproximadamente 20 personas.

Familias tutsi y hutus que se cree que colaboran con las actuales autoridades denunciando a infiltrados están en el punto de mira de los grupos afines al anterior ejército ruandés. Por ejemplo, en Taba, Rural Kigali, unas 20 personas resultaron muertas en dos incidentes separados ocurridos el 23 de diciembre y el 5 de enero, respectivamente. Según los informes, el 9 de febrero al menos 11 tutsis fueron abatidos a tiros tras ser obligados a salir de los vehículos en que circulaban por la carretera hacia Tare, también en Rural Kigali.

Asimismo, se ha dado muerte a varios miembros del anterior ejército de Ruanda recientemente retornados del Zaire, en algunos casos cuando se encontraban detenidos, y en otros casos en sus casas junto con sus familias. No siempre se conoce la identidad de los perpetradores. Entre el 18 y el 23 de enero mataron en Nyarutovu, Ruhengeri, al ex comandante Jean de Dieu Bizabarimana, a su esposa y a sus hijos, y en Nyamyumba, Gisenyi, quitaron la vida al también ex comandante François-Xavier Uwimana y a sus seis hijos.

El reciente incremento de la violencia está propagando el miedo entre una población ya de por sí muy sometida a tensión y temerosa de represalias en ambas partes tras el retorno de más de un millón de refugiados, muchos de los cuales se sospecha que tomaron parte en el genocidio de 1994.

Los delegados han dicho: «En Ruanda el miedo es tangible. La gente tiene terror a hablar. Muchos nos dijeron que ya no se atreven a ir a ciertas regiones. Nos informaron sobre casos de homicidios no explicados y de «desapariciones» ocurridos incluso en la propia capital, Kigali».

Estos temores afectan por igual a la población y a los componentes de las organizaciones extranjeras. El homicidio de cinco trabajadores de derechos humanos de las Naciones Unidas en Cyangugu, en el suroeste, ocurrido el 4 de febrero, ha tenido un efecto especialmente devastador, impidiendo que las organizaciones locales e internacionales realicen investigaciones independientes sobre violaciones de derechos humanos en ciertas partes del país.

Amnistía Internacional cree que este estado de cosas podría ser el preludio de una peligrosa situación en la que los homicidas podrían seguir matando a civiles inermes ante la ausencia de observadores independientes que cuenten lo que ocurre.

Amnistía Internacional ha afirmado: «El gobierno de Ruanda debe aplicar medidas inmediatas para evitar que se llegue a una situación en la que estos actos de violencia extrema se conviertan en hechos de la vida diaria».

La organización ha añadido: «El gobierno debe ejercer el control sobre sus propias fuerzas de seguridad y asegurarse de que se suspende de servicio y se pone a disposición de los tribunales de justicia a todo integrante de esas fuerzas implicado en violaciones de derechos humanos. Deben investigarse sin demora, y de forma independiente e imparcial, todos los sucesos de violación de los derechos humanos, y los resultados de esas investigaciones han de hacerse públicos».

Amnistía Internacional ha instado también a los grupos armados de oposición a que dejen de inmediato de cometer homicidios deliberados y arbitrarios de civiles inermes.

La organización ha declarado que, si bien no se puede hacer responsable al gobierno de Ruanda de los actos de los grupos de oposición armada, sí es responsabilidad suya el garantizar que sus propias fuerzas no perpetran homicidios de represalia.